



El debilitamiento de la capacidad democrática: la creación de mitos y el desarrollo petrolero en la Amazonía ecuatoriana

por Susan Reider*, Robert Wasserstrom

Terra Group, 86 Cambridge Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, USA

RESUMEN: Durante los últimos 20 años, fue desarrollándose una narrativa estándar para describir los efectos del desarrollo petrolero en la Amazonía ecuatoriana. Según esta narrativa, las petroleras internacionales aprovecharon una supervisión gubernamental débil para acabar con la selva tropical y dañar a las comunidades indígenas. Con el tiempo, los indígenas de la Amazonía y los ambientalistas se unieron para luchar contra las “grandes petroleras” en los tribunales y en la opinión pública. La historia se ha contado en innumerables campañas internacionales, publicaciones de Internet, artículos de noticias y revistas, e incluso en una película reciente. Entre los académicos, los abogados de los demandantes y los periodistas de América del Norte y Europa ya es casi una certeza. No obstante, muchas de los supuestos e implicaciones aún no se estudiaron. ¿Son los hechos fundamentales verdaderos? ¿Debe responsabilizarse a las empresas privadas por las decisiones soberanas que toman los gobiernos acerca de la explotación petrolera y los derechos nativos? ¿Por qué este discurso es tan ampliamente difundido en los Estados Unidos, Canadá y Europa, pero es desestimado por muchos científicos sociales ecuatorianos? Con datos históricos y 3 estudios de caso, afirmamos que la narrativa estándar tal como se presenta hoy obscurece más de lo que explica y podría debilitar la capacidad democrática del Ecuador.

PALABRAS CLAVE: Ecuador, defensa, Amazonía, petróleo, Tetete, Sansahuari

Reventa o nueva publicación prohibidas sin el consentimiento escrito de la editorial

INTRODUCCIÓN: DE UNA REPÚBLICA BANANERA A UN PETROESTADO

En 1967, el Ecuador ingresó en el mercado petrolero mundial cuando se hizo un importante descubrimiento de petróleo en la selva tropical del noreste del país, conocida como el Oriente. Una vez más, los ecuatorianos se enfrentaron a una pregunta que perduraba desde la independencia de España en 1822: cómo incorporar los territorios amazónicos del país. El *boom* petrolero, que comenzó cerca de Lago Agrio en 1972, parecía brindar una respuesta definitiva (Schodt 1987: 107).

De 1972 a 1990, Texaco operó los campos de Lago Agrio en virtud de un contrato entre el gobierno ecuatoriano y el Consorcio TexPet. Originalmente, TexPet incluía una tercera empresa, Gulf Oil, que vendió sus acciones y se fue del país. Para 1977, la empresa petrolera estatal CEPE (ahora con el nuevo nombre de Petroecuador), tenía el 62,5% del Consorcio. A partir de

*Correo electrónico: terragroup@iapc.net

1990, esta reemplazó a Texaco como socia operativa del Consorcio y, en 1992, asumió la titularidad exclusiva de todos los derechos de producción. En este trabajo, las referencias a “Texaco” se reservan a las actividades de la empresa matriz, Texaco Corporation, adquirida por Chevron en 2000.

El ingreso del petróleo les permitió a los funcionarios ecuatorianos invertir en proyectos de infraestructura, educación y salud, ubicados primordialmente en Quito, Guayaquil y otras ciudades (Rodríguez Lara, sin fecha). Las nóminas de empleados del gobierno se engrosaron y surgió una clase media de tamaño considerable (Banco Mundial 1991: 1, Hurtado 1997: v-xxviii). No obstante, la producción petrolera fue acompañada de un enorme endeudamiento contra futuros ingresos (Philip 1982: 115). Acosados por los bajos precios petroleros internacionales, el endeudamiento nacional que subía y otra guerra fronteriza con Perú, los gobernantes

ecuatorianos regularmente reducían los subsidios a la gasolina y subían el precio del transporte público (Martz 1987: 400-401). Entre 1981 y 1984, se sucedieron las protestas callejeras en Quito año tras año. La única solución parecía ser incrementar la producción petrolera, a pesar de la baja en el precio internacional.

En 1983, CEPE recurrió a las empresas extranjeras para hacer nuevas inversiones en campos no comprobados (Martz 1987:354-355). Adjudicó a Occidental Petroleum Corporation (Oxy) un contrato de exploración que incluía parte de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Concedió a Conoco otro contrato que abarcaba una zona dentro del Parque Nacional Yasuní (declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biósfera de la UNESCO, y territorio tradicional del pueblo huaorani). Se descartaron las objeciones de los grupos ambientalistas y de los defensores de los derechos de los indígenas.

A medida que se extendían los caminos por el Oriente, los agricultores pobres de la Sierra andina llegaban a raudales y se asentaban en territorios supuestamente desocupados, según las leyes de reforma agraria del Ecuador (Baynard et al. 2013; Wasserstrom & Southgate 2013). Para conseguir su título de propiedad, los migrantes debían cortar la mitad del bosque y sembrar pasto u otros cultivos (Pichón 1993). Con miras a ampliar la frontera agrícola del país, el gobierno también otorgó préstamos a una tasa de interés baja e incentivos fiscales para los grandes productores de palma africana y de ganado (Rudel 1993: 34). Para 1994, cuando la Ley de Fomento Agropecuario cerró la frontera amazónica, se había despejado casi una quinta parte de la selva tropical del Oriente para transformarla en una zona agrícola. Obligados a competir con los nuevos pobladores para retener sus propias tierras, los pueblos indígenas de la región comenzaron a organizarse y resistir (Vickers 1988). En 1975, se fundó la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN) y, en 1979, se creó la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP).

LA ELABORACIÓN DE LA NARRATIVA ESTÁNDAR

La reacción contra la presencia de Conoco en el Parque Nacional Yasuní comenzó apenas la empresa anunció sus planes de iniciar la exploración petrolera allí en 1986. Para 1989, una alianza conformada por grupos ambientalistas ecuatorianos y estadounidenses – en particular, Rainforest Action Network (RAN), Natural Resources Defense Council (NRDC, Consejo Para la Defensa de los Recursos Naturales), Acción Ecológica, el Sierra Club y el Fondo de Defensa Legal del Sierra Club – inició la Campaña Amazonía por la Vida (Hall 1993). En 1992, se les unieron (aunque con resquemores) las dos organizaciones políticas indígenas más importantes del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) (Hall 1993;

Sabin 1998; Kimerling 2006: 430). A medida que la campaña antipetrolera avanzaba, los ambientalistas también reclutaban a los colonos mestizos para oponerse a la política petrolera (Sawyer 2001: 166).

Sin embargo, los grupos ambientalistas no optaron por presionar al gobierno ecuatoriano, que era dueño de las reservas petroleras y además determinaba el uso del suelo en el Oriente. Al contrario, se enfocaron en las petroleras extranjeras y los bancos internacionales (Treakle 2000: 225-226). Comenzó a formularse una narrativa estándar que hace hincapié en cuatro mensajes básicos:

- Las operaciones petroleras tienen como consecuencia la deforestación generalizada y contaminan el medio ambiente, en especial los ríos y quebradas.
- Las empresas petroleras usurpan las tierras indígenas y generan daños importantes en las culturas tradicionales.
- La explotación petrolera beneficia en gran medida a las empresas extranjeras, mientras que los ecuatorianos quedan con los costos ambientales y sociales.
- Como agentes de la penetración neoliberal y la globalización, las empresas privadas deben asumir la responsabilidad principal por esos costos.

Con leves variaciones, estos mensajes se utilizaron durante los siguientes 15 años en campañas orientadas hacia por lo menos ocho empresas transnacionales (ver Apéndice 1).

En algunos casos, la narrativa fue más allá: se acusó a las empresas de cometer un genocidio contra las comunidades indígenas. La acusación se hizo por primera vez contra Conoco en 1989, aunque se cambió rápidamente a “etnocidio” (Hall 1993). Se repitió en 1993 en una demanda contra Texaco que incluyó el reclamo adicional de que las empresas habían desplazado a los indígenas de sus tierras. Según un grupo activista, por ejemplo, “Cinco grupos indígenas de la región han perdido el 95% de sus tierras ancestrales y han visto una disminución radical de su población. Estos grupos –los cofán, los secoya, los siona, los quichuas y los huaorani– vivieron con prosperidad en la selva tropical durante años antes de la llegada de Texaco” (Frente de Defensa de la Amazonía 2009: 2-3). Más recientemente, se agregó una tercera acusación: cuando llegó Texaco en 1964, declararon los activistas, “habitaban la región dos grupos indígenas nómades, los tetete y los sansahuari, que hasta ese momento no habían tenido contacto con el mundo exterior. Poco después de la llegada de Texaco, se informó que habían desaparecido para siempre” (Frente de Defensa de la Amazonía 2013: 1).

Desde la década de 1980, la narrativa estándar ha evolucionado por medio de la prueba y el error. Sus componentes se ensayaron y se refinaron en diversas campañas, en las que se agregaron nuevos componentes y se dejaron fuera los que no lograban movilizar el respaldo externo. Tres casos de estudio, basados mayormente en nuestra experiencia directa en el Ecuador (1995-2013), ilustran esa evolución.

Conoco, una victoria dudosa

En 1986, la empresa norteamericana Conoco (en ese momento, propiedad de la fabricante de sustancias químicas DuPont), firmó un contrato con el gobierno ecuatoriano para explorar el Boque 16. El bloque abarcaba 200.000 ha. de selva virgen ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní y del territorio ancestral de los huarani (o waorani). Casi de inmediato, RAN envió a Conoco una carta de advertencia acerca del Bloque 16 y emitió su primera “alerta pública de acción” en 1988. Al año siguiente, lanzó una campaña de gran visibilidad en los Estados Unidos con el respaldo de activistas ambientales importantes ecuatorianos.

Al principio, RAN y sus aliados se centraban en la protección de la flora y la fauna de la zona contra la explotación petrolera. Pero pronto se dieron cuenta de que ese enfoque tenía poca resonancia fuera de los círculos de conservacionistas forestales. En unos pocos meses, cambiaron la campaña para incluir otro componente esencial del ecosistema de la selva tropical: los indígenas. Las ventajas de la nueva estrategia pronto se hicieron evidentes. Los pueblos indígenas aportaban un vínculo hacia el amplio mundo de los activistas de derechos humanos, lo que atrajo nuevas fuentes de apoyo. Randy Hayes, director ejecutivo de RAN, formuló una narrativa modificada:

A diferencia de nuestros bosques en Estados Unidos, la selva tropical está habitada. La destrucción de esta no solo plantea interrogantes sobre los derechos territoriales y la biodiversidad –de monos, de árboles–, sino que también plantea el interrogante de las personas. La suerte de las comunidades indígenas guarda una estrecha relación con la suerte de la selva, lo que plantea profundas cuestiones de derechos humanos si se destruye el territorio ancestral de estas personas. Si se destruye la selva, se destruyen esas personas. En las selvas tropicales, por lo tanto, los derechos humanos y la ecología están profundamente interrelacionados (citado en Hall 1993: 6).

Inmediatamente surgieron algunos problemas importantes. Muchos grupos indígenas no querían ser “preservados”; buscaban que el gobierno reconociera sus derechos ancestrales sobre la selva y compartiera equitativamente los resultados de su desarrollo (cita de Valerio Grefa, presidente de la CONFENIAE, en Hall 1993; Grefa 1993). También querían participar “en el diseño, la ejecución y el monitoreo de los proyectos [petroleros] que se realicen en sus territorios” (cita de Rafael Pandam, vicepresidente de la CONAIE, en CESR 1994: ix). Asimismo, los activistas de derechos humanos se preocupaban por salvaguardar los derechos territoriales indígenas, no por utilizar a los grupos étnicos como decoración en una campaña ambientalista del primer mundo.

En 1989, el NRDC envió a Ecuador a su propia representante, Judith Kimerling. Lideró un equipo de abogados y especialistas ambientales en el Oriente que inspeccionó los antiguos campos petroleros de Texaco (para ese entonces

ya eran operados por Petroecuador). En su libro *Amazon Crude* [*Crudo Amazónico*] publicado en 1991 por NRDC, Kimerling hizo una modificación profunda en el argumento utilizado contra el desarrollo petrolero en la selva tropical ecuatoriana. Hasta ese momento, el activismo ambiental en el Ecuador se había centrado más que nada en la deforestación, pero Kimerling (1991: 31) introdujo un nuevo elemento –la contaminación– en la campaña anti-petrolera:

Todos los días, miles de perforaciones petroleras generan más de 4,3 millones de galones de residuos tóxicos, que se vierten o se derraman casi en su totalidad en el medio ambiente, sin ningún tratamiento, contaminando innumerables ríos y arroyos, que a menudo son las únicas fuentes de agua disponibles para las comunidades de la zona. La quema de petróleo y gas contaminan el aire, junto con la materia orgánica volátil que ingresa en el aire de las piscinas de desechos y los caminos cubiertos con petróleo, y de los derrames no remediados.

Frente a la implacable presión internacional, Conoco se fue del Ecuador en 1991. ¿Pero acaso fue una victoria para la selva? Robert Kennedy, Jr. (que en ese entonces lideraba el programa internacional del NRDC) expuso su opinión en el *Washington Post*:

Las empresas estadounidenses con operaciones en la selva tropical presentan un blanco apetecible para los grupos ambientalistas norteamericanos... pero los clichés no salvarán las selvas tropicales que quedan en el planeta. Necesitamos un enfoque más sofisticado, un enfoque que nos permita negociar con aquellas empresas dispuestas a comprometerse con los más altos estándares ambientales. El problema, finalmente, no lo causan las empresas estadounidenses, sino las decisiones de los gobiernos motivados por un complejo ciclo de deuda, pobreza y población en crecimiento (R. Kennedy 1992).

Finalmente, la coalición en contra de Conoco se fracturó sobre la relativa importancia de los derechos indígenas y otras diferencias: una facción se oponía a toda explotación en la selva tropical, mientras que otro grupo manifestó que podría apoyar el desarrollo fuera del Parque Nacional Yasuní y la Reserva Territorial Huaorani (Cummings 1003; Hall 1993; Fontaine 2003a; Fontaine y Narváez 2007). Mientras tanto, como escribió Paul Sabin (1998), los grupos indígenas a menudo han visto con buenos ojos los proyectos petroleros que les aportaron ganancias reales si se incluían salvaguardas genuinas. Pero las objeciones de Kennedy la narrativa estándar –en particular, al énfasis exclusivo en las empresas extranjeras pero no en Petroecuador ni en el gobierno ecuatoriano– pasaron desapercibidas.

La campaña contra Texaco: los tetete y los sansahuari

Incluso antes de la partida de Conoco en 1991, se agregó otro elemento a la narrativa: la aniquilación del grupo indígena conocido como los tetete. El 21 de julio de 1987, los medios ecuatorianos informaron que el obispo Alejandro Labaca y la hermana Inés Arango fueron muertos con lanzas por los tagaeri, un subgrupo de los huarani que se había

retirado del contacto con el exterior en 1968. Las represalias del gobierno contra los indígenas parecían una posibilidad concreta. El 24 de julio, la CONFENIAE convocó a una conferencia de prensa en Quito: “En declaraciones a la prensa”, escribe Cabodevilla (1997: 16), el vocero de la CONFENIAE “lamentó la muerte de los misioneros, pero ellos han sido utilizados criminalmente por intereses económicos que representan las transnacionales petroleras, caucheras y de palmas de aceite, que están socavando nuestro territorio, a tal punto que ahora solo sobreviven 2.500 huaorani de los 60.000 que vivían antes de que empezara la explotación petrolera... recordó que los pueblos záparo, que eran 600.000, y los tetete, que eran 30.000, se han extinguido”.

La CONFENIAE abandonó rápidamente esta versión y adoptó otra posición que enfatizaba su visión de un desarrollo más democrático y “plurinacional” en el Ecuador. Para 1991, también había reducido sus lazos con los grupos antipetroleros dentro del movimiento ambientalista (Hall 1993; Sawyer 1997: 71). En gran medida, los antropólogos e historiadores ecuatorianos hicieron caso omiso de la leyenda de los tetete: la consideraban una postura política mal planteada y, al parecer, tampoco estaban de acuerdo con ella. No obstante, un pequeño grupo activista en el Ecuador y los Estados Unidos ha mantenido viva la leyenda, con citas diversas a un “informe del gobierno de 1987” o “un funcionario del gobierno” (CESR 1994; Kimerling 1994: 8; Switkes 1994; Jochnik 1995; Coffey y otros 1996; Little 1999; Little 2001). Aunque ya no se menciona la cifra de 30.000 personas, la leyenda de la exterminación de los tetete ahora ingresó en el juicio contra Texaco en el Ecuador (*María Aguinda y otros c. Chevron*) y en la cobertura de los medios y comentarios relacionados con el tema.

A pesar de ello, los registros históricos dan un panorama muy distinto (Wasserstrom et al. 2011). Los tetete eran un pequeño grupo relacionado con el pueblo vecino de los siona-secoya; tenían su territorio dentro de lo que más tarde se convirtió en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Desde 1885 hasta la década de 1920, los caucheros ecuatorianos trabajaban en la zona y secuestraban o les disparaban a los tetete cuando los veían. A medida que se disminuían los tetete y su territorio, sus vecinos, los siona, se expandían. En algún momento anterior a 1940, según la tradición oral de los siona, se produjo una confrontación entre los siona y los tetete a la vera del Río Aguarico: “El asalto en sí fue un típico ataque sorpresa amazónico de mañana en el que, según se informó, varios de los tetete resultaron muertos. Se dice que el motivo del ataque fue una acusación de brujería que ocurrió... durante una visita que hicieron los tetete” a un grupo de siona que vivía en el Río Aguarico (Vickers 1983: 475).

En 1965 o 1966, mientras se abrían trochas sísmicas para la exploración petrolera, un grupo de trabajadores se toparon con varias casas de los tetete sin encontrar a nadie. En marzo de 1966, unos misioneros capuchinos

encontraron a 2 hombres y una mujer ancianos. Lamentablemente, no habían llevado intérprete, por lo que no pudieron reunir mucha información. En 1973, Orville Johnson, un misionero protestante estadounidense, visitó la misma aldea de los tetete acompañado de 3 asistentes siona-secoya. Johnson confirmó que los sobrevivientes conformaban una sola familia aislada, pero estos se negaron a revelar mucho más: hablaban con sus antiguos enemigos, y era comprensible que se mostraran reticentes a declarar que estaban solos. Después de ese episodio, nunca más se los volvió a ver.

La verdad sobre los sansahuari es más asombrosa: jamás existieron. Una búsqueda exhaustiva de registros misioneros, antropológicos, lingüísticos e históricos no encontró ninguna mención de un grupo étnico llamado sansahuari en la región. Durante el *boom* cauchero (de 1885 a 1930), la mayoría de los habitantes de la zona –de los pueblos cofán y siona– se trasladó a misiones capuchinas a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel (que hoy forman la frontera internacional entre Colombia y Ecuador). En 1923, huyeron de las misiones después de una epidemia de sarampión que tuvo efectos devastadores y emigraron a las zonas deshabitadas que estaban río abajo. En 1926, los misioneros hallaron a un pequeño grupo de cofán refugiados de sus misiones que vivía cerca del Río Sansahuari en el Ecuador, donde recolectaban caucho que vendían a un comerciante colombiano. Unos años más tarde, a medida que se disipaba el peligro de la epidemia, estos cofán regresaron a sus tierras ancestrales cerca de las misiones capuchinas abandonadas, donde permanecen hasta el día de hoy. Hasta el año 2003, cuando se inició la demanda contra Texaco en el Ecuador, nadie jamás había mencionado a los sansahuari. Al parecer, se los inventó para que desempeñaran el papel de víctimas que inspiran apoyo para los demandantes.

No obstante, la historia de la supuesta desaparición de este grupo en manos de petroleros extranjeros ha tomado vida propia, de lo cual se exponen tres ejemplos. En 2003, cuando la demanda contra Texaco regresó de Nueva York al Ecuador, Acción Ecológica declaró que “Texaco es responsable de la aceleración en el proceso de extinción de pueblos como los tetete y los sansahuari, que habitaban la zona en donde usted [sic] instaló los campos petroleros” (*La Hora*, 2003). En 2009, Kerry Kennedy, hermana de Robert Kennedy, Jr., escribió: “Los dos grupos nómadas que alguna vez habitaron la región, los tetete y los sansahuari, han desaparecido. Podría decirse que lo que hizo Texaco fue un homicidio negligente” (K. Kennedy 2009). Más recientemente, el abogado de los demandantes Pablo Fajardo (2010) aseveró que “Las tierras donde Texaco comenzó la exploración en ese entonces estaban habitadas por pueblos nativos como los siona, los secoya, los cofán, los huaorani, los tetete, los sansahuari; estos últimos dos se extinguieron en los primeros años después de la llegada de Texaco”. Aseveraciones similares llegaron a investigaciones académicas (por ejemplo, Martínez-Domínguez 2009).

Villano: construcción del consenso, administración del conflicto

Para fines de la década de 1980, los líderes indígenas temían que otras zonas de la Amazonía ecuatoriana se abrieran a la explotación petrolera sin que se les consultara ni se obtuviera su consentimiento. Esos temores estaban justificados. En 1988, Atlantic Richfield Corporation (ARCO) recibió los derechos de exploración sobre el Bloque 10 en la Provincia de Pastaza, al sur de donde TexPet realizaba sus operaciones. En 1991, ARCO halló un importante depósito de petróleo en un lugar llamado Villano, cerca de seis pequeños asentamientos indígenas. Pronto, RAN comenzó a hacer circular acusaciones de violaciones a los derechos indígenas y de degradación ambiental (Méndez et al. 1998; Fontaine 2004).

En Villano, la explotación petrolera generó otras tensiones. La mayor parte de las comunidades nativas de la provincia pertenecían a la OPIP, la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, que se fundó con la ayuda de la Iglesia Católica para defender los territorios nativos. Villano era una excepción: la zona estaba afiliada a la AIEPRA (la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza, Región Amazónica), una organización evangélica que se había separado de la OPIP. Debido a las campañas internacionales posteriores contra ARCO, la OPIP y sus aliados afirmaban que la empresa usaba “tácticas de divide y triunfarás” para que los pueblos de Villano se desprendieran de la OPIP (Brysk 2000: 171; Sawyer 2004: 4). No obstante, el antropólogo Sharman Haley (2004: 202) escribió: “Antes de que Arco prestara su ayuda, las comunidades tenían muy poco en cuanto a servicios básicos de salud, educación, transporte y comunicaciones. Habría sido muy difícil para ellos aguantar y negociar beneficios futuros, sostenibles y a largo plazo”, incluida la visión de la OPIP de un único “territorio étnico” en Pastaza (ver Apéndice 1).

A partir de mediados de 1995, ARCO se dio cuenta de que no podía esperar ayuda de Petroecuador, que era dueña del campo de Villano. Invitó a la OPIP, la AIEPRA y los integrantes de la comunidad (que habían formado su propia organización con sede en Villano, la Asociación de Desarrollo Indígena, Región Amazónica, ASODIRA) para elaborar un plan de desarrollo financiado por la empresa. Contrató a un experto (el ex jefe del Programa Bosques, Árboles y Comunidades de la FAO en el Ecuador), que fue aceptable por todos. En cumplimiento de su anterior acuerdo con la OPIP, convocó a un Comité Técnico Ambiental (CTA) para que supervisara las actividades de ARCO, conformado por representantes de estas 3 organizaciones indígenas. Durante los 3 años siguientes, los integrantes de la CTA diseñaron un plan de monitoreo ambiental e inversión social en Pastaza. Las comunidades de Villano participaron directamente en estas discusiones y aprobaron el plan.

La OPIP jamás renunció por completo a la narrativa estándar como arma táctica contra ARCO y el gobierno ecuatoriano. Incluso mientras los líderes de la OPIP participaban en el CTA y trabajaban con los representantes de la empresa, continuaron con la presión internacional para impulsar su programa político más amplio por medio de RAN en San Francisco, Oxfam América en Boston y Amazon Coalition en Washington. Aunque sus objetivos cambiaron, finalmente reclamaron el respaldo de ARCO para quitarle a Petroecuador el control sobre la explotación petrolera en Pastaza, una estrategia que los funcionarios de Petroecuador derrotaron simplemente con negarse a participar en las discusiones. Con el tiempo, tal como documenta Fontaine (2004), los líderes de la OPIP pasaron a otros asuntos, y la nueva dueña de ARCO, BP, vendió su participación en Villano. Pero la narrativa del “divide y triunfarás” resonó entre los académicos y activistas extranjeros, y aún resuena hoy en día.

En contraste, muchos observadores en el Ecuador vieron con buenos ojos los esfuerzos de ARCO. “Al fin y al cabo, el Bloque 10 brindó un escenario para una serie de experimentos en la construcción de consenso sobre cuestiones sociales y ambientales que surgen de deficiencias en la política ecuatoriana. En este contexto, los centros de consulta que se construyeron *sui generis* a lo largo del conflicto (El Comité Técnico Ambiental y el Foro de Buena Vecindad) deberían verse como esfuerzos [por parte de ARCO] para institucionalizar las relaciones con las organizaciones y las comunidades indígenas” (Fontaine 2004: 31; ver también Korovkin 2003). En medio del fuego cruzado entre las exigencias políticas de la OPIP y la intransigencia del gobierno, otros *stakeholders* igualmente intentaron encontrar puntos en común. “Para nosotros ha sido un proceso difícil”, le dijo un líder de Villano a Haley, “por la sencilla razón de que no había un proceso establecido para trabajar, negociar, cooperar, ni para la compañía ni para los pueblos indígenas” (cita de Héctor Mayancha, Presidente de la ASODIRA, en Haley 2002¹: 16).

Al final, Villano demostró ser un caso inusual. Las autoridades ecuatorianas se negaron a reproducirlo o institucionalizar sus lecciones. En cambio, Petroecuador mantuvo una política duradera, adoptada originalmente en 1984, exigiendo que las empresas privadas “satisficieran las necesidades y demandas sociales de los habitantes que residían en sus zona de operación” como parte de sus contratos de operación (Navarro 1995: 242). Según Navarro (1995: 243-245), esta política ha producido “graves distorsiones” entre las comunidades indígenas:

¹ Haley S (2002) Communities and Corporations: Leveraging Oil and Gas for Sustainable Local Development [Aprovechamiento del petróleo y el gas para el desarrollo local sustentable], (manuscrito inédito)

Han surgido horribles divisiones entre los grupos amazónicos, a medida que las empresas han avanzado con sus propias estrategias para solucionar las necesidades sociales. Las negociaciones y los pagos sembraron la semilla de la corrupción, los problemas culturales y, en síntesis, la anarquía institucionalizada... Mientras tanto, las comunidades y las organizaciones han adoptado la estrategia de presionar a las compañías para obtener ayuda financiera o infraestructura que raya con el soborno.

Otros expertos han planteado objeciones similares. Según Rodolfo Stavenhagen (2006: 10), Relator Especial de la ONU sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, el gobierno de Ecuador sigue considerándose un intermediario entre las comunidades locales y las empresas petroleras en vez de regulador o garante de los derechos humanos. “Sin una política social del Estado, la población indígena local debe conformarse con los servicios sociales mínimos que brindan las compañías petroleras, y se quejan de que no se respeta su derecho colectivo a una consulta previa, libre e informada, como garantiza la Constitución”. En particular, advierte “la ausencia casi absoluta de instituciones estatales que protejan y garanticen los derechos de estos pueblos indígenas”. A pesar de las tendencias populistas del actual presidente ecuatoriano, Rafael Correa, esta situación permanece igual.

DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD

Después de la campaña contra Conoco, Acción Ecológica publicó una serie de documentos, artículos y documentos en los cuales argumenta que es necesario detener por completo o restringir ampliamente la producción petrolera en el Ecuador (Garzón 1995; Martínez 1995; Coffey et al. 1996; Acosta et al. 2000). Por primera vez, describieron al gobierno como un “mero instrumento” de las empresas internacionales, responsables de la deforestación, contaminación y colonización (Varea & Ortíz 1995: 100). Amplificado por Internet, esta narrativa se extendió a las redes de activistas y académicos de Norteamérica, Europa y el resto del mundo. Uno de los resultados destacados de sus esfuerzos (Langewiesche 2007) apareció en la revista *Vanity Fair*, de circulación masiva en los Estados Unidos:

Pero veamos cuál es la verdadera historia. Dios creó la Tierra y, más tarde, el petróleo, pero hasta la década de 1950 dejó que Lago Agrio se desarrollara naturalmente. En verdad, Lago Agrio ni siquiera existía en esa década. No tenía nombre. Era un lugar salvaje e inexplorado ubicado sobre el río Aguarico, un bosque paradisíaco que recorrían pequeños grupos de indígenas desnudos, algunos de los cuales creían que el único mundo que existía era el mundo de los sueños. Cazaban con cerbatanas, bebían infusiones alucinógenas, hacían el amor en la selva y a veces reducían las cabezas de sus enemigos.

Esta narración pintoresca refleja 2 pilares duraderos de la narrativa estándar: que el Oriente era un bosque paradisíaco antes de que se descubriera el petróleo y que los indígenas prosperaban en el aislamiento. Omite casi todos los eventos críticos que dieron forma a la vida de los indígenas en ese lugar: cuatro siglos de dominación y evangelización española; el boom cauchero, cuando muchos indígenas de la zona fueron esclavizados por los caucheros del Ecuador y Colombia; la epidemia de sarampión de 1923, que casi exterminó por completo a la mayoría las comunidades nativas; el ataque de los sionas que terminó con la historia de los tetete; la decisión del gobierno, en 1964 y 1972, de colonizar las tierras indígenas; y los subsidios del gobierno a la agricultura comercial en la selva tropical. Y, por supuesto, hace caso omiso de la decisión política de gastar casi todo el dinero del petróleo en Quito y Guayaquil, donde están los votos.

Por el contrario, los científicos sociales ecuatorianos con frecuencia han mirado más allá del comportamiento individual de las empresas petroleras para explicar el fracaso de la explotación petrolera (Bustamante 2003; Bustamante 2007; Fontaine 2003a; Fontaine 2010; ver también los múltiples autores en Fontaine 2003b). Evitan la idea de “captura del estado” por parte de las operadoras extranjeras; en cambio, tienden a hacer hincapié en las continuas “deficiencias democráticas” del Ecuador, junto con sus políticas populistas, los complejos sistemas de corrupción y distribución de las rentas petroleras, su discriminación étnica y racial, y la influencia persistente de las élites políticas y económicas. Los problemas como la deforestación y el despojo de los territorios indígenas se analizan como el resultado de una gobernanza energética equivocada y no como las consecuencias inevitables de una mala conducta corporativa o las maquinaciones de la política internacional neoliberal.

Pero la narrativa estándar es una historia tan buena –una historia que confirma la visión forastera romántica sobre la Amazonía– que es no se la puede renunciar. Alimenta las campañas antipetroleras, ayuda a conseguir fondos, atrae la atención de las celebridades y genera cobertura en los medios de comunicación. No pareciera importar que está rechazada por muchos investigadores, especialistas en derechos humanos, grupos indígenas y ONGs. Tampoco importa que no sea cierto. Como han argumentado Fontaine y otros, las campañas internacionales no le hacen ningún favor al Ecuador, sino que obstaculizan la búsqueda de soluciones verdaderas y dificultan la institucionalización de esas soluciones. Al radicalizar el conflicto, profundizan las deficiencias de la democracia en vez de superarlas. Recalcan el problema, pero lo atribuyen a la causa equivocada. Como escribió Scott Mainwaring (2008: 31): “La construcción efectiva del Estado debe ser central a la agenda política contemporánea. La necesidad crítica es construir un Estado que proteja a sus ciudadanos y garantice sus derechos, sea eficiente e interactúe de manera eficaz con los mercados y con la sociedad civil para resolver los retos que enfrenta la democracia en el siglo XXI”.

En nuestra opinión, ha llegado el momento de hacer a un lado la narrativa estándar en todas sus variantes. No contribuye al fortalecimiento de la capacidad gubernamental ni del estado de derecho. No ha ayudado a asegurar los derechos territoriales y culturales de los indígenas. Transpone causa y efecto. Plantea más interrogantes que los que responde, interrogantes que constituyen el centro de la mitología política del Ecuador. En última instancia, el modo en que se responden esos interrogantes determinará si el gobierno podrá asumir mayor responsabilidad frente a sus ciudadanos, si podrá desarrollar su capacidad de producir beneficios sostenibles para ellos. Los investigadores y activistas internacionales pueden desempeñar un papel importante para alcanzar ese resultado, pero no lo harán si siguen responsabilizando a “La Compañía” por la incapacidad del gobierno para mejorar su propio desempeño.

Agradecimientos. Los autores agradecen a los 2 árbitros anónimos sus comentarios sumamente útiles.

LITERATURA CITADA

- Acosta A, Almeida A, Balseca M y otros (2000). El Ecuador post petrolero. Acción Ecológica, Oilwatch, Ildis, Quito.
- Frente de Defensa de la Amazonía (2009). “Understanding the Lawsuit Behind ‘Crude’: Background Information on Aguinda v. ChevronTexaco”. www.chevrontoxico.com (acceso el 12 de noviembre del 2010).
- Frente de Defensa de la Amazonía (2013). “About the affected communities”. Disponible en <http://chevrontoxico.com/about/affected-communities/about-the-affected-communities> (acceso el 22 de junio de 2013)
- Bayard C, Ellis J, Davis, H (2013). “Roads, petroleum and accessibility: the case of eastern Ecuador”. *GeoJournal* 78: 675-695
- Brysk A (2000). *From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations in Latin America*. Stanford University Press, Palo Alto, CA.
- Bustamante, T (2003). “Las perspectivas de discusión de los temas socio-ambientales vinculados a la explotación petrolera en el Ecuador: posiciones encontradas o encuentro de posiciones”. En: Fontaine G (ed.) *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. I. Las reglas de juego*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, pág. 27-50.
- Bustamante T (2007). *Detrás de la cortina de humo*. FLACSO, Quito.
- Cabodevilla MA (1997). *La selva de los fantasmas errantes*. Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana (CICAME), Pompeya.
- Center for Social and Environmental Rights (1994). *Rights Violations in the Ecuadorian Amazon. The Human Consequences of Oil Development*. CESR, Nueva York.
- Coffey G, Bravo E, Martínez E (1996). *Oilwatch*. Oilwatch, Quito.
- Cummings C (1993). *Oil in the Ecuadorian Rainforest: A Primer*. Management Institute for Environment and Business, Nueva York.
- Fajardo, P (2010). Entrevista con Oscar León. Disponible en www.therealnews.com/t2/index.php?option=com_content
- &task=view&id=767&Itemid=74&junival=6033 (acceso el 13 de enero de 2011)
- Fontaine G (2003a). *El precio del petróleo*. FLACSO, Quito.
- Fontaine G (2003b). *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. I. Las reglas de juego*. FLACSO, Quito.
- Fontaine G (2004). *Análisis y evaluación de la gestión de los conflictos en el Bloque 10 (Ecuador)*. FLACSO, Quito.
- Fontaine, G (2010). *Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética*. FLACSO, Quito.
- Fontaine G, Narváez I (2007). *Yasuní en el siglo XXI*. FLACSO, Quito.
- Garzón P (1995). “Impacto socioambiental de la actividad petrolera: Estudio de caso de las comunidades San Carlos y La Primavera”. En: Varea A, Ortíz P (eds). *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito, pág. 265-294.
- Grefa V (1993). “Principales problemas de la región amazónica desde la perspectiva de la CONFENIAE”. En: Ruíz L (ed.). *Amazonía. Escenarios y conflictos*. CEDIME, Quito, pág. 413-420.
- Haley S (2004). “Institutional Assets for Negotiating the Terms of Development: Indigenous Collective Action and Oil in Ecuador and Alaska”. *Economic Development and Cultural Change*. 54:191-213.
- Hall S (1993). “Block 16: Conoco’s ‘Green’ Oil Strategy.” Harvard Business School Case, N9-394-001, Harvard University, Cambridge, MA.
- Hurtado O (1997). *El poder político en el Ecuador*. Editorial Planeta (10° edición), Quito.
- Jochnik C (1995). “Texaco’s Devastating Search for Amazon Crude”. www.AlbionMonitor.com (acceso 4 de abril Apr 2011).
- Kennedy K (2009) “Chevron and cultural genocide in Ecuador”. www.huffingtonpost.com/kerry-kennedy/chevron-and-cultural-geno_b_346257.html (acceso 4 de noviembre de 2009).
- Kennedy Jr R (1992). “Driving out Conoco disservice to rain forests”. *Washington Post*, Washington, DC, (24 de agosto de 1992), pág. A17.
- Kimerling J (1991). *Amazon Crude*. Natural Resources Defense Council, Nueva York.
- Kimerling J (1994). “Dislocation, Evangelization, and Contamination: Amazon Crude and the Huaorani People”. Woodrow Wilson Center, Washington, DC.
- Kimerling J (2006). “Indigenous Peoples and the Oil Frontier in Amazonia: The Case of Ecuador, ChevronTexaco, and Aguinda v. Texaco”. *International Law and Politics*, 13:414-661.
- Korovkin T (2003). “In Search of Dialogue: Oil Companies and Indigenous Peoples of the Ecuadorian Amazon”. *Canadian Journal of Development Studies*, 2:632-663.
- La Hora (2003) “Presentan demanda contra la Texaco”. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000160877/-1/Presentan_demanda_contra_la_Texaco.html (acceso el 17 de marzo del 2013)
- Langewiesche W (2007). “The Next Big Environmental David-and-Goliath Trial”. *Vanity Fair*, 4 de abril del 2007. <http://amazonwatch.org/news/2007/0404-vanity-fair-the-next-big-environmental-david-and-goliath-trial> (acceso el 13 de abril del 2010).
- Little P (1999). *Political Ecology as Ethnography: the Case of Ecuador’s Aguarico River Basin*. Instituto de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Serie Antropológica 258, Universidad de Brasilia, Brasilia, DF.
- Little P (2001). *Amazonia. Territorial Struggles on Perennial Frontiers*. Johns Hopkins, Baltimore, MD.
- Mainwaring S (2008). “The Crisis of Representation in the Andes”. En: Diamond L, Plattner M, Abente Brun, D (eds.).

- Latin America's Struggle for Democracy. Johns Hopkins University Press, Baltimore, DC, pág. 18-32.
- Martínez E (1995). "Rechazo a la Séptima Ronda de licitaciones petroleras". En: Varea A, Ortíz, P (eds.). *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito, pág. 181-218.
- Martínez-Domínguez, M (2009). "Oil Politics in the Amazon: From Ethnocide to Resistance and Survival". *Social Engagement, Empowerment and Change*, 11:1-12.
- Martz J (1987). *Politics and Petroleum in Ecuador*. Transaction Books, New Brunswick, NJ.
- Méndez S, Parnell J, Wasserstrom R (1998). "Seeking Common Ground. Petroleum and Indigenous Peoples in Ecuador's Amazon". *Environment*, 40:12-45.
- Navarro M (1995). "Conflictos en políticas de asignación y uso de los Fondos de Beneficio Social y Mitigación de Impacto Ambiental de las Petroleras". En: Varea A, Ortíz P (eds.). *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito, pág. 241-264.
- Philip G (1982). *Oil and Politics in Latin America*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Pichón F (1993). "Colonización y deforestación en la frontera agrícola de la región amazónica ecuatoriana. Resultados preliminares de una encuesta de hogares en el nor-orient". En Ruíz, L (ed.). *Amazonia. Escenarios y Conflictos*. Centro para la Investigación y el Desarrollo de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME), Quito, pág. 337-374.
- Rudel T (1993). *Tropical Deforestation: Small Farmers and Land Clearing in the Ecuadorian Amazon*. Columbia University Press, Nueva York.
- Sabin P (1998). "Searching for middle ground: Native communities and oil extraction in the Northern and Central Ecuadorian Amazon, 1967-1993". *Environmental History*, 3:144-168.
- Sawyer S (1997). "The 1992 Indian Mobilization in Lowland Ecuador". *Latin American Perspectives*, 94:65-82.
- Sawyer S (2001). "Fictions of Sovereignty: Of Prosthetic Petro-Capitalism, Neoliberal States, and Phantom-Like Citizens in Ecuador". *Journal of Latin American Anthropology*, 6:156-197.
- Sawyer S (2004). *Crude Chronicles*. Duke University Press, Durham, NC.
- Stavenhagen R (2006). Informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. Misión a Ecuador. Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, A/HRC/4/32/Add.2.28, Nueva York.
- Switkes G (1994). "The People vs. Texaco". Informe de NACLA sobre las Américas, 28. Congreso Norteamericano sobre América Latina, Nueva York.
- Treacle K (2000). "Ecuador: Structural Adjustment and Indigenous and Environmentalist Resistance". En: Fox, JA, Brown DL (eds.). *The Struggle for Accountability*. MIT Press, Cambridge, MA, pág. 217-264.
- Varea A, Ortíz P (eds.) (1995) *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito.
- Vickers, WT (1983). "The Territorial Dimensions of Siona-Secoya and Encabellado Adaptation". En: Hames, RD, Vickers, WT (eds.). *Adaptive Responses of Native Amazonians*. Academic Press, Nueva York, pág. 451-478.
- Vickers WT (1988). "Processes and Problems of Land Demarcation for a Native Amazonian Community in Ecuador". *Law and Anthropology*, 3:204-245.
- Wasserstrom R., Southgate, D (2013). "Deforestation, Agrarian Reform and Oil Development in Ecuador, 1964-1994". *Natural Resources*, 4:31-44.
- Wasserstrom R, Reider, S, Lara, R (2011). "Nobody Knew Their Names: the Legend of Tetete Extermination". *Ethnohistory*, 58:421-443.
- World Bank (1991) *Ecuador. Public Sector Reforms for Growth in the Era of Declining Oil Output*. World Bank, Washington, DC.

Apéndice 1: Hitos importantes en la política gubernamental, la resistencia indígena y el activismo ambiental en el Ecuador, 1964-2011

Año	Hecho
1964	El gobierno abre “tierras baldías” del Oriente a la colonización. A las comunidades indígenas también se les permite solicitar tierras “no reclamadas” o subutilizadas que antes eran propiedad de haciendas privadas.
1967	Se fundó la Federación Shuar en el sur del Oriente para defender el territorio tradicional ante la llegada de los migrantes.
1972	TexPet anuncia un descubrimiento petrolero importante en la Provincia de Napo.
1972	TexPet comienza la producción en sus campos de Lago Agrio y Shushufindi.
1974	Se funda ECUARUNARI en la Sierra ecuatoriana para obtener títulos de propiedad y derechos políticos para las comunidades quichua. La Ley de Reforma Agraria exige que los colonos despejen el 50% del terreno antes de recibir el título de propiedad permanente.
1975	Se funda la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN) para defender los derechos territoriales indígenas en la Provincia de Napo.
1978	La Ley de Colonización de la Región Amazónica declara que la mayor parte del Oriente son tierras públicas como estímulo a la colonización. Los analfabetas (en su mayoría indígenas) reciben el derecho a votar.
1979	Se crea la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) en la Provincia de Pastaza.
1980	FOIN, OPIP y la Federación Shuar fundan la CONFENIAE, Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana.
1984	El gobierno firma un contrato de exploración petrolera con Occidental Petroleum Company en el Bloque 15, que abarca una parte de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno.
1986	CONFENIAE y ECUARUNARI crean la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). En menos de 10 años, la CONAIE se convierte en la organización política indígena más importante del país. Se funda Acción Ecológica para oponerse a la explotación petrolera en los bosques tropicales del Ecuador. Conoco firma acuerdos de exploración para el Bloque 16 dentro del Parque Nacional Yasuní.
1988	Se inicia la campaña internacional contra Conoco. Atlantic Richfield Corporation (ARCO), con sede en los Estados Unidos, recibe los derechos de exploración sobre el Bloque 10 en la Provincia de Pastaza. La OPIP forma “grupos de base” en el Bloque 10, también conocido como Villano.
1989	Se inicia la primera campaña internacional contra Texaco. Activistas indígenas “secuestran” a algunos trabajadores sísmicos de ARCO y a empleados de Petroecuador en Sarayacu.
1990	Se inicia la campaña internacional contra ARCO. CONAIE organiza el primer “levantamiento indígena” contra el gobierno por no respetar sus derechos. Se designa la reserva huarani.
1991	Conoco se va del Ecuador. Petroecuador transfiere el Bloque 16 a la empresa estadounidense Maxus, que construye un camino de acceso. (En 1995, la empresa española Repsol compra Maxus).
1992	Se inicia la campaña internacional contra Maxus en el Bloque 16. La OPIP organiza una marcha de protesta de la Amazonía hacia Quito exigiendo la formación de un “territorio plurinacional” en la Provincia de Pastaza bajo la administración única de OPIP. Los habitantes no indígenas de Pastaza, que presuntamente perderían sus derechos territoriales, protestan contra el pedido de la OPIP de un territorio plurinacional. Posteriormente, el gobierno emite 19 títulos comunales de propiedad a comunidades indígenas, lo que enfurece a la OPIP. ARCO anuncia un descubrimiento petrolero importante en Villano.
1993	Se presenta una demanda contra Texaco en un tribunal de Nueva York, en nombre de los habitantes de Napo. Las comunidades cercanas a Villano forman su nueva organización (que con el tiempo adopta el nombre de Asociación de Desarrollo Indígena, Región Amazónica, ASODIRA) para negociar gastos sociales con ARCO. OPIP acusa a ARCO de adoptar tácticas de “divide y triunfarás”.
1994	OPIP, CONFENIAE y CONAIE ocupan el Ministerio de Energía y Minas en Quito para protestar su exclusión de las reuniones sobre el desarrollo del Ecuador y la Séptima Ronda de Licitaciones Petroleras, que abre nuevas zonas para la exploración petrolera. CONAIE organiza una “Movilización por la Vida” para protestar contra una nueva Ley de Desarrollo Agrario que transfiere tierras comunales a propietarios individuales. También exige una moratoria con respecto de la futura explotación petrolera en la Amazonía.
1996	Ocho representantes de un nuevo partido político respaldado por CONAIE, Pachakutik, son elegidos para ocupar bancas en el Congreso ecuatoriano.
1997	Se inicia la campaña internacional contra Occidental.
1998	Ecuador adopta una nueva constitución que exige que se realice la “consulta previa” con las comunidades indígenas antes de que se inicie la explotación de recursos naturales y que se comparta con ellos una parte equitativa de las ganancias.
2000	Se inicia la campaña internacional contra Burlington. Se inicia la campaña internacional contra EnCana. El Presidente Jamil Mahuad es destituido de su cargo por un triunvirato, que incluye a Antonio Vargas, líder de CONAIE.
2001	Se inicia la campaña internacional contra Consorcio OCP (Heavy Oil Pipeline).
2003	El Frente de Defensa de la Amazonía (una alianza de grupos ambientales) resume pedidos anteriores para suspender la explotación petrolera futura. ADF (también llamada Coalición de Defensa de la Amazonía) desempeña un papel prominente en la publicación de los reclamos que hacen los demandantes en el caso Texaco. Los tribunales estadounidenses desestiman la demanda contra Texaco en ese país; se inicia un nuevo juicio en el Ecuador.
2006	La petrolera canadiense EnCana vende sus operaciones en el Ecuador a un grupo de empresas chinas.
2010	El Presidente Rafael Correa propone su “Iniciativa Yasuní ITT”, en virtud de la cual las naciones ricas le pagarían al Ecuador por dejar la producción petrolera en el Parque Nacional Yasuní y áreas adyacentes.
2011	La Corte Superior de Nueva Loja culpa impone una multa a Chevron (sucesora de Texaco) de USD 18.000 millones por daños ambientales. Posteriormente fue reducida a USD 9.500 millones.

Responsabilidad editorial: Darryl Macer,
Bangkok, Tailandia

Presentado: 26 de junio de 2013; Aceptado: 1 de octubre de 2013
Pruebas recibidas del (de los) autor(es): 23 de diciembre de 2013



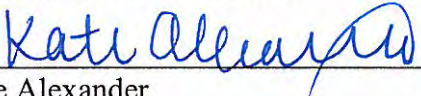
State of New York)
 Estado de Nueva York)
) ss:
) a saber:
 County of New York)
 Condado de Nueva York)

Certificate of Accuracy
Certificado de Exactitud

This is to certify that the attached translation is, to the best of our knowledge and belief, a true and accurate translation from English into Spanish of the attached document.

Por el presente certifico que la traducción adjunta es, según mi leal saber y entender, traducción fiel y completa del idioma inglés al idioma español del documento adjunto.

Dated: January 27, 2014
 Fecha: 27 de enero de 2014

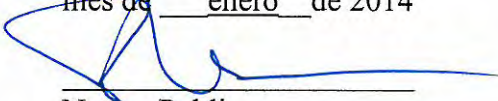


 Kate Alexander
 Project Manager – Legal Translations
 Merrill Brink International/Merrill Corporation

 [firmado]

Kate Alexander
 Gerente de Proyecto – Traducciones Legales
 Merrill Brink International/Merrill Corporation

Sworn to and signed before
 Jurado y firmado ante
 Me, this 27th day of
 mí, a los 27 días del
January 2014
 mes de enero de 2014



 Notary Public
 Notario Público

ROBERT J. MAZZA
 Notary Public, State of New York
 No. 01MA5057911
 Qualified in Kings County
 Commission Expires April 1, 2014

[firmado]
 [sello]



Undermining democratic capacity: myth-making and oil development in Amazonian Ecuador

Susan Reider*, Robert Wasserstrom

Terra Group, 86 Cambridge Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, USA

ABSTRACT: Over the past 20 yr, a standard narrative has evolved to describe the impacts of oil development in Ecuador's Amazon region. According to this narrative, international oil companies exploited weak government oversight to destroy the rain forest and harm native communities. Eventually, Amazonian Indians and environmentalists joined together to fight 'big oil' in courts of law and public opinion. This story has been told in countless international campaigns, Internet posts, news and magazine articles, and even in a recent movie. Among North American and European academics, plaintiffs' lawyers, and journalists, it has now become almost a certainty. Yet many of its assumptions and implications remain unexamined. Are the essential facts true? Should private companies be held accountable for sovereign decisions made by government about oil development and indigenous rights? Why is this discourse so popular in the US, Canada, and Europe, but dismissed by many Ecuadorian social scientists? Using historical evidence and 3 case studies, we conclude that the standard narrative as it stands today obscures more than it explains and may undermine democratic governance in Ecuador.

KEY WORDS: Ecuador · Advocacy · Amazon · Oil · Tetete · Sansahuari

Resale or republication not permitted without written consent of the publisher

INTRODUCTION: FROM BANANA REPUBLIC TO PETROSTATE

In 1967, Ecuador entered the world petroleum market when a significant oil discovery was made in the country's northeastern rain forest, known as the *Oriente*. Once again, Ecuadorians were faced with a question that had persisted since independence from Spain in 1822: how to incorporate the country's Amazonian territories. The oil boom, which began around Lago Agrio in 1972, seemed to provide a definitive answer (Schodt 1987, p. 107).

From 1972 to 1990, the Lago Agrio fields were operated by Texaco under a contract between the Ecuadorian government and the TexPet Consortium. TexPet originally included a third company, Gulf Oil, which sold its shares and left the country. By 1977, the state oil company CEPE (later renamed Petroecuador) held 62.5% of the Consortium. Beginning in

1990, it replaced Texaco as the Consortium's operating partner, and in 1992, it assumed sole ownership of all production rights. In this paper, references to 'Texaco' will be reserved for actions involving the parent company, Texaco Corporation, which was acquired by Chevron in 2000.

Oil money allowed Ecuadorian officials to invest in education, health, and infrastructure projects, located primarily in Quito, Guayaquil, and other cities (Rodríguez Lara undated). Government payrolls swelled and a sizable middle class emerged (World Bank 1991, p. 1, Hurtado 1997, p. v–xxviii). But petroleum production was also followed by massive borrowing against future revenues (Philip 1982, p. 115). Overcome by declining international prices, a growing national debt, and another border war with Peru, Ecuador's leaders regularly reduced gasoline subsidies and raised the price of public transportation (Martz 1987, p. 400–401). Street riots took

*Email: terragroup@iapc.net

place in Quito every year from 1981 to 1984. Increased petroleum production—even at lower world prices—seemed like the only solution.

In 1983, CEPE turned to foreign companies for new investment in unproven fields (Martz 1987, p. 354–355). It awarded an exploration contract that included part of the Cuyabeno Wildlife Reserve to Occidental Petroleum Corporation (Oxy). Another contract was given to Conoco that included the Yasuní National Park (a UNESCO World Heritage Site and Biosphere Reserve, as well as traditional territory of the Huaorani people). Objections from environmental groups and indigenous rights advocates were ignored.

As roads extended throughout the northern *Oriente*, impoverished highland peasants flooded in and settled on ‘unoccupied’ land under Ecuador’s agrarian reform laws (Baynard et al. 2013, Wasserstrom & Southgate 2013). To secure their claims, migrants were required to cut down half the forest and plant pasture or other crops (Pichón 1993). Eager to expand the country’s agricultural frontier, the government also provided low-interest loans and tax credits for large palm oil producers and cattle ranchers in the Amazon basin (Rudel 1993, p. 34). By 1994, when a new agrarian law (the *Ley de Fomento Agropecuario*) closed the Amazonian frontier, almost one-fifth of the country’s eastern rain forest had been cleared for agriculture. Forced to compete with settlers for legal title to their own lands, the region’s native people began to organize and resist (Vickers 1988). The Federation of Indigenous Organizations in Napo (FOIN) was founded in 1975, and the Organization of Indigenous Peoples of Pastaza (OPIP) was created in 1979.

DEVELOPING THE STANDARD NARRATIVE

Reaction against Conoco’s presence in the Yasuní National Park began almost as soon as it announced its plans to explore for oil there in 1986. By 1989, a consortium of Ecuadorian and US environmental groups – notably, Rainforest Action Network (RAN), Natural Resources Defense Council (NRDC), Acción Ecológica (Ecological Action), the Sierra Club, and the Sierra Club Legal Defense Fund – launched the Amazon Campaign for Life (Hall 1993). In 1992, they were joined (albeit uneasily) by the country’s 2 major indigenous political organizations, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE) and the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE; Hall 1993,

Sabin 1998, Kimerling 2006, p. 430). As the anti-oil campaign progressed, environmental activists also recruited non-Indian settlers to oppose petroleum policy (Sawyer 2001, p. 166).

Rather than pressure the Ecuadorian government, which owned the country’s oil reserves and set land use policy, environmental groups instead opted to focus on foreign oil companies and international lenders (Treakle 2000, p. 225–226). A standard narrative began to emerge, emphasizing 4 basic messages:

- Oil operations cause widespread deforestation and pollute the environment, especially rivers and streams.
- Petroleum companies usurp indigenous lands and disrupt traditional cultures.
- Oil development largely benefits foreign companies while Ecuadorians are stuck with the environmental and social costs.
- As agents of globalization and neoliberal penetration, private companies should bear the primary responsibility for these costs.

With slight variation, these messages were used over the next 15 yr in campaigns targeting at least 8 international companies (see Appendix 1).

In some cases, the standard narrative went further: companies were accused of committing genocide against indigenous communities. This allegation was first made against Conoco in 1989, although it was quickly changed to ‘ethnocide’ (Hall 1993). In 1993, the charge was repeated in a lawsuit against Texaco and included the additional claim that oil companies pushed Indians off their land. According to one advocacy group, for example, ‘Five indigenous groups in the region have lost 95% of their ancestral land and seen dramatic declines in their populations. These groups—the Cofan, Secoya, Siona, Kichwa, and Huaorani—had prospered in the rain forest for centuries before Texaco’s arrival’ (Amazon Defense Front 2009, p. 2–3). More recently, a third allegation was added: When Texaco arrived in 1964, advocates declared, ‘two nomadic indigenous groups, the Tetetes and the Sansahuari, inhabited the region and were as of yet uncontacted by the outside world. Shortly after Texaco’s arrival, they were reported to have disappeared forever’ (Amazon Defense Front 2013, p. 1).

Since the 1980s, the standard narrative has evolved through trial and error. Its components were tested and refined in various campaigns – adding new elements and dropping the ones that failed to mobilize external support. Three case studies, based largely on our direct experience in Ecuador (1995–2013), illustrate how it has evolved.

Conoco, a doubtful victory

In 1986, the North American company Conoco (at the time owned by chemical manufacturer DuPont), signed an agreement with the Ecuadorian government to explore Block 16. The block (200 000 ha) included intact rain forest, as well as parts of the Yasuní National Park and ancestral homelands of the Huaorani people (also spelled Waorani). Almost immediately, RAN sent Conoco a warning letter about Block 16 and issued its first public 'action alert' in 1988. The following year, it launched a high-visibility campaign in the US, with support from key Ecuadorian environmental activists.

At first, RAN and its allies focused on protecting the region's flora and fauna against oil development. But they quickly realized that this approach had little resonance outside of forest preservation circles. Within a few months, they had expanded their campaign to cover another major component of the rain forest ecosystem: native people. The advantages of their new strategy soon became obvious. Indigenous people provided a bridge to the broader community of human rights activists, which attracted new supporters. A revised narrative was later articulated by Randy Hayes, RAN's executive director:

Unlike most of our U.S. forestlands, the tropical rain forest is inhabited. Their destruction not only raises questions of land rights and biodiversity – of monkeys, of trees. It also raises questions of people. The fate of the indigenous communities [is] deeply connected to the fate of the forest, raising profound human rights issues if their homelands are to be destroyed. If you destroy the forest, you destroy these people. In the rain forests, ecological and human rights issues are therefore deeply interlinked (quoted by Hall 1993, p. 6).

Problems arose immediately. Many indigenous groups did not want to be 'preserved.' Instead, they wanted the government to recognize their ancestral rights to the forest itself and share equitably in the benefits of development (Valerio Grefa, president of CONFENIAE as quoted by Hall 1993, Grefa 1993). They also wanted to participate 'in the design, execution and monitoring of [oil] projects in their territories' (Rafael Pandam, CONAIE vice president, quoted by CESR 1994, p. ix). Human rights activists who supported them were concerned about protecting indigenous lands, not about using Indian communities as props in a first-world environmental campaign.

In 1989, NRDC sent its own representative, Judith Kimerling, to Ecuador. In the *Oriente*, she led a team of lawyers and environmental specialists who inspected Texaco's former oil fields, which by then

were operated by Petroecuador. Her 1991 book *Amazon Crude*, published by NRDC, revised the argument against oil development in Ecuador's rain forest. Until that time, environmental activism in Ecuador had focused mainly on deforestation. Kimerling (1991, p. 31) introduced a new element—pollution—into the campaign against oil:

Hundreds of oil wells generate more than 4.3 million gallons of toxic wastes every day, virtually all of which are spilled or discharged into the environment without treatment, contaminating countless streams and rivers – often the only sources of water for surrounding communities. Burning oil and gas contaminate the air, along with volatile organics that enter the air from oil-covered waste pits and roads, and unremediated spills.

Faced with unrelenting international pressure, Conoco left Ecuador in 1991. Was this a victory for the forest? Robert Kennedy, Jr. (then head of NRDC's international program) offered his own judgment in the *Washington Post*:

American corporations with rain forest operations present an inviting target for U.S. environmental groups...But platitudes will not save the world's remaining rain forests. We need a more sophisticated approach, one that will allow us to negotiate with those corporations willing to commit themselves to the highest environmental standards. The problem, after all, is not caused by U.S. corporations, but by government decisions driven by a complex cycle of debt, poverty and growing populations (Kennedy 1992).

Ultimately, the anti-Conoco coalition fractured over indigenous rights and other differences. One faction opposed all development in the rain forest; another group indicated that it might reluctantly support development outside of the Yasuní National Park and Huaorani Territorial Reserve (Cumings 1993, Hall 1993, Fontaine 2003a, Fontaine & Narváez 2007). Meanwhile, native groups often favored oil projects that brought significant benefits and included real safeguards (Sabin 1998). But Kennedy's objections to the standard narrative—specifically, to its exclusive focus on foreign companies, not Petroecuador or the Ecuadorian government—were ignored.

The Texaco Campaign: Tetete and Sansahuari

Even before Conoco departed in 1991, another element was added to the story: annihilation of an indigenous group called the Tetete. On 21 July 1987, the Ecuadorian media reported that Bishop Alejandro Labaca and Sister Inés Arango had been speared to death by Tagaeri, a Huaorani subgroup that had withdrawn from outside contact in 1968. Government

reprisals against native people seemed like a real possibility. On July 24, CONFENIAE, the federation of Amazonian Indians, convened a press conference in Quito. Cabodevilla (1997, p. 16) wrote that 'In his statement to the press, [CONFENIAE's spokesman] lamented the missionaries' death, but they had been criminally used by economic interests that represent international oil, rubber and palm oil companies, which are undermining our lands to the point where only 2500 Huaorani survive of the 60 000 who were living before oil development began...He added that 600 000 Záparo and 30 000 Tetete had been extinguished.'

CONFENIAE quickly abandoned this narrative and moved on to another position that emphasized its evolving vision of a more democratic, 'pluri-national' Ecuador. By 1991, it had also reduced its ties to anti-oil groups within the environmental movement (Hall 1993, Sawyer 1997, p. 71). Likewise, Ecuadorian anthropologists and historians largely ignored the Tetete legend: they saw it as an ill-conceived political gambit and apparently, they disagreed with it. Nevertheless, it has been kept alive by a small number of advocates in Ecuador and the US, who variously cite 'a 1987 government report' or 'a government official' as its source (CESR 1994, Kimerling 1994, p. 8, Switkes 1994, Jochnik 1995, Coffey et al. 1996, Little 1999, 2001). Although the 30 000 figure is no longer mentioned, the legend of Tetete extermination has now found its way into the Texaco lawsuit in Ecuador (*María Aguinda et al. v. Chevron*) and into related commentary and media coverage.

The historical record tells a very different story (Wasserstrom et al. 2011). The Tetete were a small group related to nearby Siona-Secoya people; their territory lay within what later became the Cuyabeno Wildlife Reserve. From 1885 through the 1920s, Ecuadorian rubber collectors worked the area and shot or kidnapped Tetete people whenever they appeared. As Tetete numbers and territory shrank, their Siona neighbors expanded. Sometime before 1940, according to Siona oral tradition, a confrontation between Siona and Tetete people took place along the Aguarico River: 'The actual raid consisted of a typically Amazonian early morning sneak attack in which a number of Tetetes were reported to have been killed. The motive for the attack is said to have been a sorcery accusation that occurred...during a visit that the Tetetes made' to one Siona group living on the Aguarico River (Vickers 1983, p. 475).

In 1965 or 1966, a work crew cutting trails for oil exploration stumbled across several Tetete houses but saw no one. In March 1966, Capuchin missionar-

ies found 2 old men and an old woman. Unfortunately, they had brought no translator, so they learned very little. In 1973, the same Tetete hamlet was visited by an American Protestant missionary, Orville Johnson, who brought 3 Siona-Secoya assistants. Johnson confirmed that the survivors represented a single, isolated household, but they refused to reveal much else. Talking to former enemies, they were understandably reluctant to admit that they were alone. After that, they were never seen again.

The truth about the Sansahuari is more startling: they never existed. An exhaustive search of missionary, anthropological, linguistic, and archival records finds no mention of any ethnic group called Sansahuari in the region. During the Rubber Boom (1885–1930), most of the area's inhabitants – Cofán and Siona people—moved to Capuchin missions along the Putumayo and San Miguel Rivers (today's international border between Colombia and Ecuador). In 1923, they fled the missions after a devastating measles epidemic and migrated into uninhabited areas farther downriver. In 1926, the missionaries found a small group of Cofán living near the Sansahuari River in Ecuador, where they collected rubber for sale to a Colombian merchant. A few years later, as the danger of epidemic faded, these Cofán moved back to their traditional homelands near the abandoned Capuchin missions, where they remain today. Until 2003, when the Texaco case was filed in Ecuador, no one had ever mentioned the Sansahuari. Apparently, they were invented to play the role of sympathetic victims.

Yet the story of their alleged disappearance at the hands of foreign oil men has taken on a life of its own. Consider these 3 examples. In 2003, when the Texaco lawsuit returned from New York to Ecuador, Acción Ecológica declared, 'Texaco is responsible for accelerating the extinction of indigenous peoples such as Tetetes and Sansahuari, who inhabited the area in where you [sic] installed the oil fields' (La Hora 2003, p. 3). In 2009, Kerry Kennedy, Robert Kennedy Jr.'s sister, wrote, 'The two nomadic groups that once inhabited the region, the Teteté and the Sansahuari, have been wiped out. What Texaco did arguably amounts to negligent homicide' (Kennedy 2009). More recently, plaintiffs' lawyer Pablo Fajardo claimed that 'The lands where Texaco started exploring back then were inhabited by native people like Siona, Secoya, Cofanes, Huaoranis, Tetete, Sansahuari—the latter two went extinct in the first years after Texaco got there' (Fajardo 2010). Similar claims have made their way into academic research (e.g. Martínez-Domínguez 2009).

Villano: building consensus, managing conflict

By the late 1980s, native leaders began to fear that other parts of Ecuador's Amazon would be opened to oil development without their consultation or assent. Their fears were well-founded. In 1988, the Atlantic Richfield Corporation (ARCO) received oil exploration rights to Block 10 in Pastaza Province, south of TexPet's operations. In 1991, ARCO found significant oil deposits at a place called Villano, near a half-dozen small indigenous settlements. Soon, RAN began to circulate allegations of indigenous rights violations and environmental degradation (Mendez et al. 1998, Fontaine 2004).

In Villano, oil development created other tensions. Most of the province's native communities belonged to OPIP, which had been founded to defend native territories with help from the Catholic Church. Villano was an exception: it was affiliated with the Association of Indigenous Protestants in Pastaza, Amazon Region (AIEPRA), an evangelical organization that had split off from OPIP. During subsequent international campaigns against ARCO, OPIP and its allies claimed that the company used 'divide and conquer tactics' to hive Villano people off from OPIP (Brysk 2000, p. 171, Sawyer 2004, p. 4). But as anthropologist Haley (2004, p. 202) wrote, 'Prior to the services provided by ARCO, the communities had very little in the way of basic health, education, transportation, and communication services. It would have been very difficult for them to hold out and bargain for future, long-term sustainable benefits' including OPIP's vision of a single 'ethnic territory' in Pastaza (see Appendix 1).

Beginning in mid-1995, ARCO realized that it could expect no help from Petroecuador, which owned the Villano field. It invited OPIP, AIEPRA, and community members (who had formed their own Villano-based organization, the Association for the Indigenous Development of the Amazon Region, ASODIRA) to design a company-financed development plan. It hired an expert (the former head of FAO's Forest Trees and Peoples Program in Ecuador), who was acceptable to everyone. Honoring its earlier agreement with OPIP, it convened a 'Technical Environmental Committee' (CTA in Spanish) to oversee ARCO's activities with representatives from all 3 indigenous organizations. Over the next 3 yr, CTA members laid out a strategy for environmental monitoring and social investment in Pastaza. Villano communities participated directly in these discussions and approved the plan.

OPIP never completely renounced using the standard narrative as a tactical weapon against ARCO and the Ecuadorian government. Even as OPIP leaders participated in the CTA and worked with company representatives, they kept up international pressure for their broader political program via RAN in San Francisco, Oxfam America in Boston, and the Amazon Coalition in Washington. Although their objectives shifted, they ultimately demanded support from ARCO to wrest control over petroleum development in Pastaza from Petroecuador—a strategy that Petroecuador officials defeated by simply walking out of the room. Eventually, as Fontaine (2004) documented, OPIP leaders moved on to other issues, and ARCO's new owner, BP, sold its interest in Villano. However, the divide-and-conquer storyline struck a chord among foreign academics and activists, where it is still replayed.

In contrast, many observers in Ecuador took a positive view of ARCO's efforts. 'When all is said and done, Block 10 provided the stage for a series of experiments in building consensus on social and environmental issues arising from deficiencies in Ecuadorian policy. In this context, the sites of consultation that were constructed *sui generis* throughout the conflict (Technical Environmental Committee and Good Neighbor Forums) should be seen as efforts [by ARCO] to institutionalize relationships with indigenous organizations and communities' (Fontaine 2004, p. 31; see also Korovkin 2003). Caught in the cross currents between OPIP's political demands and government intransigence, other stakeholders nonetheless tried to find common ground. 'For us it has been a difficult process,' said one Villano leader, 'for the simple reason that there was no established procedure for working, negotiating and cooperating, neither for the company nor for the indigenous people' (Hector Mayanacha, President of ASODIRA, quoted by Haley 2002⁴, p. 16).

In the end, Villano proved to be an unusual case. Ecuadorian authorities declined to copy it or institutionalize its lessons. Instead, Petroecuador maintained a long-standing policy, originally adopted in 1984, requiring private companies to 'meet the needs and social requirements of residents living in their areas of operation' as part of their operating contracts (Navarro 1995, p. 242). In Navarro's (1995, p. 243–245) view, this policy has produced 'serious distortions' among indigenous communities:

⁴Haley S (2002) Communities and Corporations: "Leveraging Oil and Gas for Sustainable Local Development" (unpubl. manuscript)

Hideous divisions have arisen among Amazonian groups, as companies have pursued their own strategies for meeting social needs. Bargaining and payments sowed the seeds of corruption, cultural disruption and, in synthesis, institutionalized anarchy... Meanwhile, communities and organizations have adopted a strategy of pressuring the companies to obtain financial aid or infrastructure that borders on blackmail.

Other experts have raised similar objections. According to Rodolfo Stavenhagen, the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, Ecuador's government continues to see itself as a broker between local communities and oil companies, rather than as a regulator or guarantor of human rights: 'With no State social policy, the local indigenous population must make do with the minimal social services provided by the oil companies, and they complain that their collective right to prior, free and informed consultation, as guaranteed in the Constitution, is not respected' (Stavenhagen 2006, p. 10). In particular, he notes 'the almost total lack of State institutions to protect and guarantee the rights of these indigenous people'. Despite the populist leanings of Ecuador's current president, Rafael Correa, this situation remains unchanged.

TOO GOOD TO BE TRUE

After the Conoco campaign, Acción Ecológica published a series of documents, articles and position papers arguing that oil production in Ecuador should be stopped completely or greatly curtailed (Garzón 1995, Martínez 1995, Coffey et al. 1996, Acosta et al. 2000). For the first time, they described the government as being 'merely an instrument' of international companies, which caused deforestation, pollution, and colonization (Varea & Ortíz 1995, p. 100). Amplified by the Internet, their narrative spread through activist and academic networks in North America, Europe, and elsewhere. One prominent result of these efforts (Langewiesche 2007) appeared in the widely-circulated US magazine *Vanity Fair*:

But let's get the story straight. God created Earth, and later created oil, but until the 1950s he left Lago Agrio to its natural ways. Actually, Lago Agrio did not even exist in the 1950s. It did not have a name. It was an uncharted wilderness along the Aguarico River – a forest Eden roamed by small groups of naked Indians, some of whom believed that the only real world is the world of dreams. They hunted with blowguns, drank hallucinogenic brews, made love in the jungle, and sometimes shrank enemy heads.

This fanciful account reflects 2 enduring pillars of the standard narrative: the *Oriente* was a Garden of Eden before oil was discovered and native peoples flourished in isolation. It omits virtually all of the critical events that shaped indigenous life there: 4 centuries of Spanish domination and missionization; the Rubber Boom, when many of the area's Indians were enslaved by Ecuadorian and Colombian rubber tappers; the 1923 measles epidemic, which nearly wiped out most native communities; the Siona raid that ended Tetete history; the government's determination, in 1964 and 1972, to colonize indigenous lands; and government subsidies for commercial agriculture in the rain forest. And of course, it ignores the political decisions to spend oil money mostly in Quito and Guayaquil, where the votes are.

In contrast, social scientists in Ecuador have often looked beyond the behavior of individual foreign companies to explain the failures of oil development (Bustamante 2003, 2007, Fontaine 2003a, 2010; see also various contributors in Fontaine 2003b). They eschew the idea of 'state capture' by foreign operators; instead, they have tended to emphasize Ecuador's ongoing 'democratic deficiencies,' along with its populist politics, complex systems of rent-seeking and corruption, ethnic and racial discrimination, and the persistent influence of political and economic elites. Problems like deforestation and loss of indigenous lands are framed as the outcomes of flawed governance and policy-making, not as the inevitable consequences of corporate misbehavior or international neoliberal machinations.

But the standard narrative is such a good story—one that fits an outsider's view of the Amazon—that it is too good to give up. It fuels advocacy campaigns, raises money, compels attention from celebrities, and generates periodic news coverage. It does not seem to matter that the narrative has been disavowed by the major researchers, human rights advocates, indigenous groups, and NGOs. Or that it simply is not true. As Fontaine and others have argued, international campaigns do a real disservice to Ecuador: they make the search for solutions harder and make these solutions harder to institutionalize. By radicalizing conflict, they deepen democratic deficiencies, instead of bridging them. They highlight failure, but attribute it to the wrong cause. According to Mainwaring (2008, p. 31), 'Effective state building must be at the core of the contemporary policy agenda... The critical need is to build a state that protects its citizens and guarantees their rights, that is efficient, and that interacts effectively with markets and with civil society to meet the challenges facing democracy in the twenty-first century.'

In our view, the time has come to set aside the standard narrative in all of its variants. It does no service in strengthening government capacity or the rule of law. It has not helped to ensure indigenous territorial and cultural rights. It transposes cause and effect. It raises more questions than it answers—questions that lie at the heart of Ecuador's political mythology. How they are answered will ultimately determine whether its government will become more accountable to its citizens, whether it will develop its capacity to produce sustainable benefits for them. International researchers and activists can play an important role in achieving this outcome, but not if they continue to hold 'The Company' responsible for the government's failure to improve its own performance.

Acknowledgements. The authors thank 2 anonymous reviewers for their extremely helpful comments.

LITERATURE CITED

- Acosta A, Almeida A, Balseca M and others (2000) El Ecuador post petrolero. Acción Ecologica, Oilwatch, Ildis, Quito
- Amazon Defense Front (2009) Understanding the lawsuit behind 'crude': background information on Aguinda v. ChevronTexaco. Available at www.chevrontoxico.com (accessed 12 November 2010)
- Amazon Defense Front (2013) About the affected communities. Available at www.chevrontoxico.com/about/affected-communities/about-the-affected-communities (accessed 22 June 2013)
- Baynard C, Ellis J, Davis H (2013) Roads, petroleum and accessibility: the case of eastern Ecuador. *GeoJournal* 78: 675–695
- Brysk A (2000) From tribal village to global village: Indian rights and international relations in Latin America. Stanford University Press, Palo Alto, CA
- Bustamante T (2003) Las perspectivas de discusión de los temas socio-ambientales vinculados a la explotación petrolera en el Ecuador: posiciones encontradas o encuentro de posiciones. In: Fontaine G (ed) *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1. Las reglas de juego*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, p 27–50
- Bustamante T (2007) *Detrás de la cortina de humo*. FLACSO, Quito
- Cabodevilla MA (1997) *La selva de los fantasmas errantes*. Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana (CICAME), Pompeya
- CESR (The Center for Economic and Social Rights) (1994) *Rights violations in the Ecuadorian Amazon. The human consequences of oil development*. CESR, New York, NY.
- Coffey G, Bravo E, Martínez E (1996) *Oilwatch*. Oilwatch, Quito
- Cummings C (1993) *Oil in the Ecuadorian rainforest: a primer*. Management Institute for Environment and Business, New York, NY
- Fajardo P (2010) Interview with Oscar Leon. Available at www.therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&junival=6033 (accessed 13 January 2011)
- Fontaine G (2003a) *El precio del petróleo*. FLACSO, Quito
- Fontaine G (2003b) *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador. 1. Las reglas de juego*. FLACSO, Quito
- Fontaine G (2004) *Análisis y evaluación de la gestión de los conflictos en el Bloque 10 (Ecuador)*. FLACSO, Quito
- Fontaine G (2010) *Petropolítica. Una teoría de la gobernanza energética*. FLACSO, Quito
- Fontaine G, Narváez I (2007) *Yasuní en el siglo XXI*. FLACSO, Quito
- Garzón P (1995) *Impacto socioambiental de la actividad petrolera: estudio de caso de las comunidades San Carlos y La Primavera*. In: Varea A, Ortíz P (eds) *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito, p 265–294
- Grefa V (1993) *Principales problemas de la región amazónica desde la perspectiva de la CONFENIAE*. In: Ruiz L (ed) *Amazonia. Escenarios y conflictos*. CEDIME, Quito, p 413–420
- Haley S (2004) Institutional assets for negotiating the terms of development: indigenous collective action and oil in Ecuador and Alaska. *Econ Dev Cult Change* 53:191–213
- Hall S (1993) *Block 16: Conoco's 'green' oil strategy*. Harvard Business School Case N9-394-001. Harvard University, Cambridge, MA
- Hurtado O (1997) *El poder político en el Ecuador*, 10th edn. Editorial Planeta, Quito
- Jochnik C (1995) *Texaco's devastating search for Amazon crude*. Available at www.albionmonitor.com/11-14-195/texacoamazon.html (accessed 4 April 2011)
- Kennedy K (2009) *Chevron and cultural genocide in Ecuador*. www.huffingtonpost.com/kerry-kennedy/chevron-and-cultural-geno_b_346257.html (accessed on 4 November 2009)
- Kennedy R Jr (1992) *Driving out Conoco disservice to rain forests*. Washington Post, Washington, DC, (August 24, 1992), p A17
- Kimerling J (1991) *Amazon crude*. Natural Resources Defense Council, New York, NY
- Kimerling J (1994) *Dislocation, evangelization, and contamination: Amazon crude and the Huaorani People*. Woodrow Wilson Center, Washington, DC
- Kimerling J (2006) *Indigenous peoples and the oil frontier in Amazonia: the case of Ecuador, ChevronTexaco, and Aguinda v. Texaco*. *Int Law Polit* 13:414–661
- Korovkin T (2003) *In search of dialogue: oil companies and indigenous peoples of the Ecuadorian Amazon*. *Can J Dev Stud* 2:632–663
- La Hora (2003) *Presentan demanda contra la Texaco* (6 May). Available at www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000160877/-1/Presentan_demanda_contra_la_Texaco.html (accessed on 17 March 2013)
- Langewiesche W (2007) *The next big environmental David-and-Goliath trial*. *Vanity Fair*, April 4, 2007. Available at <http://amazonwatch.org/news/2007/0404-vanity-fair-the-next-big-environmental-david-and-goliath-trial> (accessed on 13 April 2010)
- Little P (1999) *Political ecology as ethnography: the case of Ecuador's Aguarico River basin*. *Serie Antropológica* 258. Instituto de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, Universidad de Brasilia, Brasilia
- Little P (2001) *Amazonia. Territorial struggles on perennial frontiers*. Johns Hopkins, Baltimore, MD
- Mainwaring S (2008) *The crisis of representation in the Andes*. In: Diamond L, Plattner M, Abente Brun, D (eds)

- Latin America's struggle for democracy. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, p 18–32
- Martínez E (1995) Rechazo a la Séptima Ronda de licitaciones petroleras. In: Varea A, Ortíz P (eds) *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito, p 181–218
- Martínez-Domínguez M (2009) Oil politics in the Amazon: from ethnocide to resistance and survival. *Soc Engagement Empowerment Change* 11:1–12
- Martz J (1987) *Politics and petroleum in Ecuador*. Transaction Books, New Brunswick, NJ
- Mendez S, Parnell J, Wasserstrom R (1998) Seeking common ground. *Petroleum and indigenous peoples in Ecuador's Amazon*. *Environment* 40:12–45
- Navarro M (1995) Conflictos en políticas de asignación y uso de los fondos de beneficio social y mitigación de impacto ambiental de las petroleras. In: Varea A, Ortíz P (eds) *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito, p 241–264
- Philip G (1982) *Oil and politics in Latin America*. Cambridge University Press, Cambridge
- Pichón F (1993) Colonización y deforestación en la frontera agrícola de la región amazónica ecuatoriana. Resultados preliminares de una encuesta de hogares en el nor-oriente. In: Ruíz L (ed) *Amazonia. Escenarios y conflictos*. Centro para la Investigación y el Desarrollo de los Movimientos Sociales del Ecuador (CEDIME), Quito, p 337–374
- Rudel T (1993) *Tropical deforestation: small farmers and land clearing in the Ecuadorian Amazon*. Columbia University Press, New York, NY
- Sabin P (1998) Searching for middle ground: native communities and oil extraction in the northern and central Ecuadorian Amazon, 1967–1993. *Environ Hist* 3:144–168
- Sawyer S (1997) The 1992 Indian mobilization in lowland Ecuador. *Lat Am Perspect* 24:65–82
- Sawyer S (2001) Fictions of sovereignty: of prosthetic petrocapitalism, neoliberal states, and phantom-like citizens in Ecuador. *J Lat Am Anthropol* 6:156–197
- Sawyer S (2004) *Crude chronicles*. Duke University Press, Durham, NC
- Stavenhagen R (2006) Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of Indigenous People. Mission to Ecuador. UN Human Rights Council A/HRC/4/32/Add.2.28. UN Human Rights Council, New York, NY
- Switkes G (1994) *The People vs. Texaco*. NACLA Report on the Americas 28. North American Congress on Latin America, New York, NY
- Treakle K (2000) Ecuador: structural adjustment and indigenous and environmentalist resistance. In: Fox, JA, Brown DL (eds) *The struggle for accountability*. MIT Press, Cambridge, MA, p 217–264
- Varea A, Ortíz P (eds) (1995) *Marea negra en la Amazonia*. Ediciones Abya Yala, Quito
- Vickers WT (1983) The territorial dimensions of Siona-Secoya and Encabellado adaptation. In: Hames, RD, Vickers, WT (eds) *Adaptive responses of native Amazonians*. Academic Press, New York, NY, p 451–478
- Vickers WT (1988) Processes and problems of land demarcation for a native Amazonian community in Ecuador. *Law Anthropol* 3:204–245
- Wasserstrom R, Southgate D (2013) Deforestation, agrarian reform and oil development in Ecuador, 1964–1994. *Nat Resour* 4:31–44
- Wasserstrom R, Reider S, Lara R (2011) Nobody knew their names: the legend of Tetete extermination. *Ethnohistory* 58:421–443
- World Bank (1991) *Ecuador. Public sector reforms for growth in the era of declining oil output*. World Bank, Washington, DC

Appendix 1. Milestones in government policy, indigenous resistance and environmental activism in Ecuador, 1964–2011

Year	Event
1964	Government opens 'vacant' areas in <i>Oriente</i> to outside settlers. Indigenous communities are also allowed to receive 'unclaimed' or under-utilized land formerly owned by private <i>haciendas</i> . Federación Shuar is founded in southern <i>Oriente</i> to defend traditional territory from highland migrants.
1967	TexPet announces a major petroleum discovery in Napo Province.
1972	TexPet begins production at its Lago Agrio and Shushufindi fields. ECUARUNARI is founded in highland Ecuador to seek land titles and political rights for Quichua communities.
1974	Revised Agrarian Reform Law effectively requires homesteaders to clear 50% of their land before receiving permanent title.
1975	Federation of Indigenous Organizations in Napo (FOIN) is founded to defend indigenous land rights in Napo Province.
1978	Government adopts 'Amazon Region Settlement Act,' declaring most of <i>Oriente</i> to be public land and encouraging highland dwellers to resettle there. Illiterates (mostly indigenous people) are allowed to vote for the first time.
1979	Organization of Indigenous Peoples of Pastaza (OPIP) formed in Pastaza Province.
1980	FOIN, OPIP, and the Federación Shuar form CONFENIAE, Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon.
1984	Government leases Block 15, including part of the Cuyabeno Wildlife Reserve, to Occidental Petroleum Company.
1986	CONFENIAE and ECUARUNARI form Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador (CONAIE). Within 10 yr, CONAIE becomes the country's major national indigenous political organization. Acción Ecológica is founded to oppose oil development in Ecuador's rain forests. Conoco signs exploration agreement for Block 16, including part of Yasuní National Park.
1988	International advocacy campaign against Conoco begins. US-based Atlantic Richfield Corporation (ARCO) receives exploration rights in Block 10 in Pastaza Province. OPIP forms 'base group' in Block 10, also known as Villano.
1989	First international campaign against Texaco begins. ARCO's seismic contractor and Petroecuador employees 'kidnapped' by native activists at Sarayacu.
1990	International campaign against ARCO begins. CONAIE organizes the first 'National Indian Uprising' protesting against government failure to respect indigenous rights. Huaorani Reserve designated.
1991	Conoco leaves Ecuador. Petroecuador transfers Block 16 to US company Maxus, which builds an access road into the block. (In 1995 Maxus is bought by the Spanish firm Repsol.)
1992	International campaign against Maxus begins in Block 16. OPIP organizes a protest march from the Amazon to Quito demanding formation of a 'plurinational territory' in Pastaza Province. This territory would include a grant of land to OPIP alone. Non-indigenous settlers in Pastaza, who would presumably lose their own land rights, strike against OPIP's demand for a plurinational territory. The government subsequently issues 19 communal land titles to indigenous communities. OPIP is infuriated. ARCO announces a significant oil discovery at Villano.
1993	A lawsuit against Texaco is filed in US District Court in New York on behalf of Napo residents. Communities near Villano form their own organization (eventually named the Association for Indigenous Development, Amazon Region, ASODIRA) to negotiate with ARCO for community benefits. OPIP accuses ARCO of adopting 'divide and conquer' tactics.
1994	OPIP, CONFENIAE, and CONAIE occupy the Ministry of Energy and Mines in Quito to protest against their exclusion from discussions of Ecuador's development and from the 7th Petroleum Bid Round, which opens new rainforest areas for oil exploration. CONAIE organizes 'Mobilization for Life' to protest against a new Agricultural Development Law that transfers communally held land to individual property owners. It also demands a moratorium on oil development in the Amazon.
1996	Eight indigenous representatives of a new CONAIE-sponsored political party, Pachakutik, are elected to the Ecuadorian Congress.
1997	International campaign against Occidental begins.
1998	Ecuador adopts a new constitution requiring 'prior consultation' of indigenous communities before resource development begins and a share of benefits from it.
2000	International campaign against Burlington begins. International campaign against EnCana begins. President Jamil Mahuad deposed by a triumvirate, including Antonio Vargas, head of CONAIE.
2001	International campaign against OCP (Heavy Oil Pipeline) Consortium begins.
2003	Amazon Defense Front (ADF, a coalition of environmental advocacy groups) renews earlier calls to suspend future oil development. ADF (also called Amazon Defense Coalition) plays a prominent role in publicizing claims made by plaintiffs in the Texaco case. The Texaco lawsuit is dismissed by US courts; a new suit is filed in Ecuador.
2006	Canadian oil company EnCana sells its Ecuadorian operations to a joint venture of Chinese companies.
2010	President Rafael Corerra proposes his 'Yasuní Initiative,' whereby wealthy nations would pay Ecuador to forego oil production within the Yasuni National Park and adjacent areas.
2011	The Ecuadorian court finds Texaco guilty of pollution for its Lago Agrio and Shushufindi operations; it imposes a fine of US\$18 billion (subsequently raised to \$19.6 billion).